

La Alianza Democrática cree su deber plantear al pueblo de Chile su pensamiento sobre la encrucijada en que el país se encuentra.

Al cabo de diez años de régimen autoritario nuestra patria vive la peor crisis económica, política y social de su historia, cuya gravedad reside, precisamente, en su múltiple dimensión de cuyos negativos efectos no se ha librado ningún segmento de nuestra sociedad. Desencanto, frustración, resentimiento, y crecientes manifestaciones de rebeldía y violencia marcan el comportamiento social. Las restricciones a la libertad, la falta de participación y la prolongada interdicción política que ha privado a los chilenos de su calidad de ciudadanos, se hace intolerable. El desempleo masivo y la paralización productiva atentan contra el más elemental sentido de dignidad del hombre, y generan angustia, hambre y desesperanza, además de la ya casi unánime crítica a la soberbia, dogmatismo e insensibilidad de los gobernantes.

Ante tan dramático cuadro, la Alianza Democrática tiene la más profunda convicción de que el país requiere simultáneamente y con la mayor urgencia, una efectiva pacificación de los espíritus, un cambio profundo en la conducción y la política económica y un plan político concreto y preciso de transición rápida a la democracia. El plan económico y el plan político que reclamamos son, a su vez, condición necesaria para la pacificación de los espíritus.

1.- La necesidad de "otra" política económica.

La crisis profunda en que está sumida la economía chilena ha golpeado duramente la mayoría de los hogares, a los trabajadores y empresarios. La responsabilidad política y técnica del desastre recae, fundamentalmente, en los gobernantes y en las autoridades económicas, dogmáticas y soberbias - los llamados

Chicago Boys - que contando con el respaldo absoluto del Jefe del Estado dispusieron de un poder delegado que les permitió imponer, sin contrapeso, sus trasnochadas concepciones ideológicas.

Hace ya tiempo que los porfiados hechos restaron toda credibilidad al intento de culpar de nuestros males a la recesión internacional, sin duda muy real, pero a la que no es posible cargarle el grueso de la cuenta. Basta recordar que ningún país del mundo ha tenido una disminución del Producto Geográfico Bruto cercano al 14,8% de caída, que experimentó Chile en 1982, ni se presentan situaciones tan extremas de endeudamiento interno generalizado y de deuda externa per cápita. Pocos regímenes han llegado en un período largo de poder absoluto a un balance tan desalentador como el que exhibe Chile al cabo de 10 años de gestión del actual Jefe de Estado el que se resume en una disminución neta del ingreso per cápita, vale decir que el nivel de vida de nuestra población es hoy inferior al que había alcanzado en 1970 o 1973.

En síntesis, nos enfrentamos al siguiente cuadro: un nivel de desempleo que incluídos PEM y POJH asciende a alrededor de 30%, un endeudamiento externo que alcanza a 20 mil millones de dólares, un bajísimo nivel de ahorro interno (no más de 3% del PGR en 1982) y una situación de endeudamiento de las empresas productivas con el sistema financiero y de éste con el Banco Central, que ha dejado al conjunto de la economía en una situación de extrema vulnerabilidad, inestabilidad y dependencia respecto del Estado. Como consecuencia de ello, y de la política dogmática de reducción de la acción pública, ha crecido el déficit habitacional y se ha hecho difícil y, a menudo, inalcanzable, el acceso a la salud y la educación de los hijos.

Una crisis de tal magnitud no se resuelve con medidas marginales de tipo reactivo que implican un abandono sólo parcial

de los dogmas de estos años, ni puede confiarse la recuperación a la conducción de quienes son responsables principales del fracaso. Por ello la Alianza Democrática se suma a las voces angustiadas y airadas de empresarios, gremios y trabajadores que reclaman un cambio radical en la dirección de la economía, que debe confiarse a un equipo que tenga fe en la capacidad de los chilenos de movilizar los cuantiosos recursos actualmente ociosos y que se comprometa con una política de efectiva y rápida reactivación que genere las indispensables fuentes de trabajo, que permitan dar nuevos cauces a la iniciativa de empresa y que, sobre todo, restituya a los chilenos su dignidad disminuída.

No corresponde a la Alianza Democrática formular un plan económico concreto, que es responsabilidad directa del gobierno. Sin embargo, y sin perjuicio de su propósito de plantear próximamente una posición constructiva al respecto, desea en esta oportunidad sumar su juicio al de economistas responsables, no vinculados a nosotros, que en estos días han propuesto políticas que permitirían a la economía chilena crecer en 1984 a alrededor de un 11% en lugar del 4 o 5% proyectado de manera optimista por fuentes oficiales en el contexto de la política vigente. Un aumento de demanda generado por una política fiscal y de inversiones del Estado en vivienda y obras públicas más agresiva, junto a un aumento más inmediato de las remuneraciones del sector público, y a una regulación de la tasa de interés son ingredientes claves de un esfuerzo reactivador sano que al mismo tiempo se preocupe de preservar los equilibrios macroeconómicos particularmente la inflación y la balanza de pagos.

2. La urgencia de un plan político

Al cabo de 10 años de graves y persistentes restricciones y vigencia permanente de estados de excepción, el período autoritario se acerca a su fin. La designación del Ministro Jarpa pareció

responder a las exigencias de cambio, al requerimiento de apertura política y transición efectiva a la democracia que con creciente fuerza se estaba planteando en el país. Parecía, también, ser una reacción a la protesta social cada vez más intensa y generalizada que expresaba el descontento popular. Por ello, las primeras declaraciones del nuevo Ministro del Interior y las acciones liberalizadoras que ha emprendido generaron un clima de esperanza en diversos sectores de la población, particularmente la clase media y el empresariado.

En el mes y medio ya transcurrido se realizaron, además, dos reuniones de diálogo entre el Ministro Jarpa y representantes de la Alianza Democrática, en las que el Ministro fue pródigo en declaraciones de voluntad democrática, de su intención de acelerar el proceso de transición, incluyendo modificaciones constitucionales si fuere necesario, y de restituir las libertades públicas, cuestión esta última, planteada como precondition por la Alianza.

La opinión pública ha cifrado grandes expectativas en el diálogo así iniciado y aparece desconcertada ante su posterior interrupción y aparente estancamiento. La Alianza Democrática está consciente de la trascendencia que se ha atribuido a estos hechos y de su consiguiente responsabilidad política ante el país. Por ello considera indispensable dejar en claro su posición.

Es indiscutible que se ha producido una significativa liberalización traducida en la restitución parcial de algunas libertades públicas, en el retorno de un mayor número de exiliados, en la reanudación de tacto de la actividad política y en el término de una de las situaciones de excepción, de opresión, el Estado de Emergencia. Reconocemos y valoramos la importancia de estos hechos. Es evidente, sin embargo, que los avances producidos, están lejos de significar una restitución plena de las libertades pública

El artículo 24 transitorio sigue vigente y pende como espada de Damocles sobre todo aquel que de una u otra forma disienta del régimen. La política sigue legalmente proscrita de modo que estamos en presencia de una situación de tolerancia o benevolencia de la autoridad que puede ser revertida en cualquier instante, como se ha encargado de reiterarlo en frecuentes intervenciones el Jefe del Estado. Por último, quienes no adhieren al gobierno no tienen acceso real al medio de comunicación de masas decisivo de nuestro tiempo que es la televisión. Lo ocurrido recientemente con el programa de debate político que en Canal 11 iba a dirigir la destacada periodista señora Raquel Correa y que fue prohibido antes de su inicio, es prueba elocuente de esta falta de libertad efectiva.

En síntesis, la Alianza Democrática planteó desde un comienzo que un diálogo serio y fructífero sólo podría realizarse en condiciones de igualdad y de cara al país. Pese a los avances producidos, estamos aún lejos de esa realidad. La Alianza Democrática entiende por diálogo un proceso de búsqueda de acuerdo político que afecta e interesa a toda la comunidad nacional. Dada su trascendencia potencial debe estar revestido de una máxima formalidad. Por ello es esencial que se realice en condiciones de efectiva igualdad entre los participantes y hace obvia la necesidad de que sea un proceso público que permita al pueblo tener información cabal sobre su desarrollo. Por ello, la Alianza Democrática confía y exige que la restitución de las libertades públicas se complete con premura y en plenitud.

Sin perjuicio de lo anterior, la esencia del diálogo radica obviamente en las materias que se incorporen a la agenda de discusión, así como la claridad y precisión de los juicios y propuestas que respecto de ellas se formulen, condiciona a su vez, la posibilidad de resultados fructíferos.

Queremos, por ello, ser francos y directos. Nos asiste

la más profunda convicción de que se requiere un Plan político concreto de retorno rápido a la democracia, cuyos plazos y modalidades de puesta en práctica necesariamente implican modificar la Constitución de 1980. En verdad, no puede ser de otra manera porque es un hecho objetivo que la Constitución vigente no es un factor de unidad nacional. Por el contrario, divide y polariza a los chilenos. Para un sector que creemos mayoritario y que estamos seguros de interpretar, algunas de sus disposiciones permanentes son antidemocráticas, su articulado transitorio es abusivo y de claro corte autoritario, y está viciada por un proceso de elaboración y aprobación que careció de mínimas condiciones de participación y libertad ciudadanas.

Es por eso que algunas ideas insinuadas por el Ministro Jarpa respecto de un acortamiento significativo de los plazos y la eventual elección pronta de un Congreso por votación popular resultaron esperanzadores, así como producen desaliento afirmaciones paralelas del Jefe de Estado que fundamentalmente se limitan a reafirmar el itinerario vigente.

La Alianza Democrática tiene el deber de señalar que no tendrá destino un diálogo que pretenda desarrollarse en un marco de ambigüedad o de inmovilismo respecto del proceso de retorno a la democracia. El país está, pues, a la espera de una decisión gubernativa y de iniciativas concretas que configuren una agenda susceptible de ser objeto de un diálogo constructivo.

Creemos, por último, que el plan político de transición rápida a la democracia que esperamos es condición necesaria para la eficacia de la nueva conducción y política económicas que se reclama. Sacar al país de la crisis requiere, en efecto, esfuerzo conjunto, participación amplia y responsabilidad compartida de

todos los sectores, condiciones que sólo pueden darse en el contexto de un clima político no confrontacional, para lo cual se requiere un proceso claro de retorno a la democracia plena que sea aceptado por todos los sectores.

3. La pacificación de los espíritus. El país ha sido dolorosamente impactado por recientes hechos de violencia producidos en las poblaciones de Santiago, Valparaíso y otros lugares del territorio nacional. La Alianza Democrática comparte la angustia colectiva y suma su voz al clamor general que reclama el fin de toda violencia. Creemos que para que tal cosa ocurra es indispensable, en primer término, hacer un esfuerzo serio y objetivo por comprender la naturaleza y alcance del fenómeno. Nos asiste la más profunda convicción que en su esencia se trata de una expresión social causada por el hambre, la miseria y la desesperanza a que ha conducido la atroz y persistente situación de desempleo, sumado a la falta de participación y a la represión dura y a menudo brutal, que ha caracterizado al comportamiento de la autoridad ante las protestas de los sectores más modestos de la población. Esta situación objetiva ha sido aprovechada por extremistas y provocadores, a cuya acción coincidente, hasta ahora impune, se deben los hechos concretos de violencia que hemos debido lamentar, a los que también han contribuido los excesos de una acción represiva descontrolada.

Son múltiples los testimonios de pobladores, sacerdotes y periodistas que ratifican nuestra visión acerca de la naturaleza y causas de la violencia. Rechazamos por ello de manera categórica la acusación gratuita de que al llamar la Alianza Democrática a protestas pacíficas, haya incentivado de hecho la violencia. Creemos, por el contrario, haber realizado un esfuerzo responsable por evitarla, encauzando la protesta social hacia formas pacíficas de expresión.

El país tiene derecho y necesita que se aclare la verdad de lo ocurrido y se estudien a fondo sus causas. Instamos por ello

al Gobierno a constituir una comisión independiente del más alto nivel en que participen personeros de la Iglesia, Colegios Profesionales, Comisión de Derechos Humanos y otras entidades, para que proceda a una investigación objetiva de los hechos en el terreno mismo, y luego dé a conocer al país por los medios de comunicación, incluida la Televisión Nacional, las conclusiones de su trabajo, sin perjuicio de ponerlos también a disposición de la justicia para que se juzgue a quién corresponda.

En definitiva, a juicio de la Alianza Democrática la única forma de evitar nuevos y quizás peores brotes de violencia es una urgente y decidida acción del gobierno encaminada a producir tanto un cambio profundo en la política económica como un plan político concreto de retorno rápido a la democracia. Sólo este doble proceso devolverá a los chilenos su dignidad de ciudadanos libres y su esperanza en un futuro mejor. La Alianza Democrática, por su parte, compromete desde ya su acción responsable para contribuir, a la medida de sus fuerzas, a reducir el peligro de violencia que subsistirá mientras perdure la actual situación de angustia material extrema y de tensión política que agobia al país.